

Problemas de gobernabilidad en la última crisis argentina: entre la hegemonía y la fragmentación

MARCOS NOVARO

Universidad de Buenos Aires

1. Introducción: democratización y gobernabilidad

El desafío de conformar capacidades de gobierno, principalmente en términos de recursos fiscales y administrativos del Estado y el establecimiento de reglas económicas sustentables, ha sido recurrente en la historia argentina de, al menos, el último cuarto de siglo. Dicha recurrencia, no está de más decirlo, ha sido estimulada por el carácter dilemático del desafío: para afirmarse los gobiernos deben poder ofrecer resultados en términos de funcionamiento del sector público y crecimiento económico, cuya generación está impedida por las trabas que imponen el Estado y el régimen económico existentes, que se alimentan entre sí y que son a la vez las que dan sostén a las propias coaliciones gubernamentales. Se han sucedido diversos intentos de solución a este dilema, pero todos ellos, tras lograr ciertos éxitos iniciales, han probado ser insuficientes y efímeros, desembocando en nuevas crisis políticas y económicas. La transición democrática iniciada en 1982 proveyó una base de legitimidad sólida y permanente al régimen político, pero no aportó demasiado en términos de reformas institucionales y económicas. Los gobiernos elegidos desde entonces se han visto por ello enfrentados a situaciones que revelaron lo precario de sus recursos políticos y financieros; poniéndose una y otra vez en evidencia que, por debajo de la frágil superficie conformada por las formas constitucionales se agita un magma potencialmente explosivo de fuerzas sociales en conflicto que alimenta y se alimenta de tendencias a la fragmentación y la anomia. De este modo, los gobiernos democráticos desde 1983 a esta parte han quedado, en coyunturas críticas, a merced de poderes fácticos de distinto origen: militares, sindicales, mediáticos, empresarios y burocráticos, locales y externos; e incluso de fragmentos del poder político e institucional: las internas partidarias, las administraciones provinciales, los tribunales. En suma, la historia de esta etapa democrática en Argentina puede concebirse como una sucesión de esfuerzos, apenas recompensados y siempre amenazados por el caos, por componer una fórmula de gobierno perdurable.

En situaciones como esta, las capacidades de gobierno suelen encontrar una ayuda inesperada de los contextos de crisis: cuando los actores sociales y políticos con los que lidian los gobiernos son masivamente afectados en su capacidad de

acción colectiva, éstos, aún en su debilidad, pueden hallar la oportunidad para sobrepasar vetos y obstáculos que en situaciones de «normalidad» aquellos les imponen. Fue así que Raúl Alfonsín (1983-1989) recién logró hacer aprobar las leyes que suspendían la persecución penal de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que los partidos habían resistido en el Congreso durante los primeros años, tras las sublevaciones de los carapintadas y la amenaza (cierta o aparente) de que se interrumpiera el proceso de democratización. En forma semejante, Menem (presidente por dos períodos entre 1989 y 1999) venció las resistencias peronistas a las reformas de mercado en gran medida gracias a la crisis de la hiperinflación de 1989, y luego venció sus propias resistencias y las de muchos de sus asociados a entregar el comando económico a Domingo Cavallo a la luz de otros dos picos hiperinflacionarios (en 1990 y 1991).

En ambos casos, de todos modos, los recursos de gobierno extraídos de las crisis no estuvieron libres de serias limitaciones, provenientes del carácter coyuntural de las fórmulas desarrolladas por los respectivos presidentes y de los vetos y presiones extorsivas que siguieron ejerciendo actores poderosos (los militares primero, los operadores financieros después). De modo que los avances logrados resultarían insuficientes para aventar de modo definitivo la amenaza de la ingobernabilidad.

En el caso de la experiencia menemista esta circunstancia resulta especialmente relevante para explicar la evolución posterior: el modo en que se implementaron las reformas estructurales condicionó obviamente sus resultados, tanto en cuanto a la eficacia y sustentabilidad de las reglas más o menos de mercado establecidas, como de los recursos de gobierno creados a partir de los cambios introducidos en el Estado. Los intereses empresarios y en particular financieros que influyeron decisivamente en la orientación de los cambios y en su implementación no tardarían en revelarse, al momento en que maduraron las nuevas reglas de juego, como agentes capaces de bloquear cualquier nuevo intento de introducir reformas que afectarían las ventajas por ellos conquistadas, en términos de apropiación de rentas y oportunidades de negocios. Por otro lado, los avances logrados en el terreno de la solvencia fiscal, la eficiencia de las políticas públicas, etc., tanto a nivel nacional como en las provincias, fueron muy parciales y francamente insuficientes para enfrentar los nuevos desequilibrios resultantes de las propias reformas, y en particular de la vigencia de la regla de la convertibilidad (que establecía el cambio fijo entre el peso y el dólar). El dilema que se presentará a fines de los años noventa en forma cada vez más dramática consistirá, así, en que el conglomerado de intereses empresarios y políticos que había ganado con las reformas realizadas a comienzos de la década probaría ser suficientemente sólido para resistir nuevas iniciativas reformistas que pudieran afectar sus intereses, pero no para actuar en la política y la economía como garante de la gobernabilidad y motor del crecimiento, al menos no en forma sostenida. Esta incapacidad se pondría dramáticamente en eviden-

cia a partir de septiembre de 1998, cuando la economía argentina entró en un largo y profundo ciclo recesivo fruto de las crisis financieras en el este asiático y en Rusia y la devaluación en Brasil, que pusieron en un brete al régimen de convertibilidad. Precisamente en el momento en que la sucesión de Carlos Menem volvía imperiosa la formación de una nueva coalición de gobierno.

En lo que sigue se analizarán los problemas de gobernabilidad que enfrentaron las dos gestiones más relevantes que siguieron a la salida de Menem del poder: la de la Alianza, encabezada por el radical Fernando de la Rúa (1999-2001) y la de Eduardo Duhalde (2002-2003). Los resultados de ambas son, a simple vista, diametralmente opuestos, y ello se corresponde con profundas diferencias en términos del contexto, los recursos políticos de los gobiernos y de la oposición en cada caso, y los liderazgos; sin embargo, en términos más profundos podemos encontrar también interesantes semejanzas: los problemas de fragmentación partidaria y obstáculos para la cooperación con que debieron lidiar no difieren mucho en un caso y en otro, y tampoco las serias limitaciones para transformar efímeras capacidades de gobierno en recursos institucionales permanentes. A aquellos problemas y estas limitaciones nos referiremos aquí especialmente.

2. La Alianza: el fracaso del «cambio sin ruptura»

La Alianza entre la UCR, tradicional antagonista del peronismo, y el Frepaso, un frente de noveles agrupamientos de centroizquierda, se formó en 1997 para desplazar al PJ del poder y apostó a «corregir» aspectos parciales del «modelo económico» heredado de las reformas menemistas, preservando lo esencial (la convertibilidad del peso, la apertura comercial y las privatizaciones) bajo el supuesto de que dicho modelo era en sí viable, y que a través de mejores políticas sectoriales podía mejorarse su desempeño en términos de crecimiento económico, creación de oportunidades de empleo y redistribución social. Otro supuesto de esta estrategia para llegar al gobierno y ejercerlo era que esa corrección parcial del rumbo podía implementarla una coalición de partidos que se hiciera fuerte en el mejoramiento de la calidad institucional y técnica de las políticas públicas a implementar, dejando atrás los métodos y prácticas decisionistas, delegativas y corruptas que habían caracterizado al menemismo en la década anterior.

En lo que nos interesa principalmente aquí, analizar las razones por las cuales la Alianza fracasó en conformar un núcleo de gobernabilidad para realizar este programa, identificamos tres problemas, que definen a su vez tres momentos en el desarrollo de la experiencia aliancista, en los que se retroalimentan negativamente rasgos de diseño e implementación de su estrategia con un entorno crecientemente desfavorable: en primer lugar, la coalición no alcanzó a consolidar su liderazgo y organización y ocupó la presidencia con un respaldo elec-

toral acotado y un aún más estrecho control de los resortes institucionales imprescindibles para gobernar; en segundo lugar, se enfrentó a una crisis económica que resultó ser mucho más aguda de lo previsto y, lo que es aún más grave, de la que casi inmediatamente pasó a ser corresponsable ante la opinión pública, alentando el disenso programático en la coalición y el encapsulamiento ortodoxo del Ejecutivo; por último, las crecientes dificultades incentivaron a los integrantes de la Alianza a dejar de lado el juego colaborativo a favor de uno faccioso, que desembocaría en la quiebra del vértice gubernamental y en un proceso ya irrefrenable de deterioro político cuyo resultado sería el caótico fin del que fuera el recurso esencial de la gobernabilidad económica desde 1991, la convertibilidad monetaria.

La precaria victoria de una coalición demasiado frágil

La segunda mitad de los noventa ofreció a las fuerzas de oposición oportunidades de desarrollo que no habían conocido en la primer gestión menemista. Los dispersos grupos de centroizquierda y sectores disidentes de los partidos mayoritarios lograron superar su crónica insignificancia cuando convergieron en el Frente Grande en 1993 y en el Frepaso (Frente para el País Solidario) a fines de 1994. Por primera vez en décadas una fuerza progresista desafió el tradicional bipartidismo del peronismo y el radicalismo en las elecciones presidenciales del año siguiente. La UCR obtuvo en esa ocasión el peor resultado de su historia (su candidato presidencial cosechó entonces apenas el 16 % de los votos) pero poco después comenzó a recuperarse de su prolongado declive y del agudo faccionalismo interno, renovando su oferta de candidatos y su perfil opositor. En ello ayudó, por sobre todo, la acumulación de conflictos que comenzó a cargar las espaldas del oficialismo después de que Carlos Menem conquistara su reelección en 1995. Ambas expresiones opositoras lograrían capitalizar el creciente clima de rechazo hacia el gobierno justicialista que se extendió en la opinión pública (paradójicamente, sólo meses después de que ese gobierno lograra un resonante triunfo en las urnas) y los desprendimientos que padeció su coalición: el empresariado y sobre todo los sindicatos tomaron distancia de ella, a mediados de 1996 Domingo Cavallo se alejó del gobierno nacional y organizó su propio partido (que recogería amplias adhesiones en el electorado liberal y el mundo de los negocios) y entre los propios peronistas el candidato más firme a sucederlo en el liderazgo del partido, Eduardo Duhalde, tardó menos que Cavallo en lanzar su candidatura presidencial, tras proclamar su rechazo al neoliberalismo. La proliferación de expresiones de oposición al gobierno nacional respondía, en gran medida, al complicado cuadro que le tocaba enfrentar, en el que se combinaban problemas macroeconómicos (vulnerabilidad ante los bruscos cambios del contexto internacional, problemas de financiamiento del

sector público y de competitividad de la economía), con déficits sociales que no tardaron en agravarse cuando en 1994 se interrumpió la expansión económica gestada al establecerse la convertibilidad (desocupación, caída de los salarios, concentración del ingreso), y déficits institucionales que, si no eran nuevos, se volvían particularmente irritantes en las nuevas circunstancias (corrupción, falta de transparencia e independencia de la justicia, desbordes del poder presidencial, tensiones entre la nación y las provincias por la distribución de los recursos fiscales y el acceso al financiamiento externo).

Como los problemas que agobiaban al gobierno se correspondían bastante bien con los temas que venían agitando los partidos opositores, a éstos no les resultaría difícil cosechar adhesiones. Pero dado que muchos otros encontraron tentador tomar parte de esa cosecha, si bien la oposición radical y frepasista pudo crecer, encontró un serio obstáculo para conquistar una amplia mayoría: la emergencia de una figura de recambio dentro del peronismo, bien afirmada al menos en el reclamo social, volvía muy remota la posibilidad de que el peronismo fuera a perder el apoyo de una porción significativa de sus electores tradicionales; por otro lado, la alternativa de centroderecha que ofrecía Cavallo arrastraría consigo a una parte de los electores que desde ese sector habían apoyado a Menem en 1995, limitando tanto las posibilidades del PJ como las de la oposición frepasista y radical de crecer en ese sector. Fue en estas circunstancias que, en agosto de 1997, la UCR y el Frepaso formaron la «Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación». Con ella que pusieron fin, en las parlamentarias de octubre de ese año, a la seguidilla de victorias electorales que en forma ininterrumpida acumulaba el peronismo desde 1987, aunque por escaso margen: sumaron el 46 % de los votos, contra 37 % del justicialismo, que resignó unas pocas bancas de diputados.

La armonía inicial que parecieron lograr los socios aliancistas y su inmediata consagración como nueva mayoría en el país, sumadas a la agudización de las disputas internas en que quedó sumido el PJ y los magros resultados de la segunda presidencia de Menem, despejarían el camino para que la coalición opositora accediera dos años después al Ejecutivo nacional. El período que va de agosto de 1997 hasta octubre de 1999, con todo, dista mucho de ofrecer, a una mirada más atenta, el aspecto de un aceitado riel por el cual la nueva coalición pudiera deslizarse sin dificultades desde su primera expresión electoral hacia la conformación de una fórmula sostenible de gobierno. Tanto su concreción para los comicios de 1997, como su continuidad para las elecciones presidenciales de 1999, la selección de candidaturas y la definición de orientaciones programáticas estuvieron plagadas de dificultades. Si bien algunas de ellas encontraron circunstancialmente una vía de resolución, ello no significó una maduración estructural de la coalición, ni en términos organizativos (mecanismos de resolución de conflictos y toma de decisiones), ni de formación de un liderazgo consistente y abarcativo. En ello influyó, sin duda, el escaso tiempo trans-

currido entre la creación de la coalición y la asunción del gobierno; pero también, y por sobre todo, pesaron las debilidades de cada una de las fuerzas aliadas y las inclinaciones y estrategias de sus conducciones.

El Frepaso, sin lugar a dudas el actor más dinámico de la política argentina de la segunda mitad de los años noventa, reunía un electorado heterogéneo identificado con las demandas de transparencia y fortalecimiento de las instituciones, lucha contra la corrupción, las crecientes desigualdades y la falta de oportunidades por las que se responsabilizaba al gobierno de Menem. La flexibilidad que demostró este conglomerado de pequeños grupos políticos para adaptar su discurso de campaña a las expectativas del electorado, y su carencia de compromisos con los fracasos de gobiernos anteriores o con grupos de interés predominantes constituían sus principales ventajas sobre los partidos tradicionales, en un momento en que muchos votantes desconfiaban de ellos y buscaban nuevos horizontes. Pero esos rasgos eran al mismo tiempo elocuentes indicios de sus debilidades estructurales, que a mediano plazo limitarían sus posibilidades de actuación como fuerza de gobierno: el Frepaso carecía de una estructura de alcance nacional y de recursos humanos en número y calidad suficiente para desempeñar los muchos cargos de representación que comenzó a ocupar desde 1994. Salvo en la Ciudad de Buenos Aires, su distrito más fuerte, no contaba con un mecanismo interno de participación y toma de decisiones aceptado por todas las corrientes y sectores que lo integraban. Y era muy dependiente del prestigio vertiginosamente conquistado por unos pocos líderes, que diferían entre sí tanto en su historia como en sus apreciaciones del presente y apuestas para el futuro: Carlos Álvarez, la principal figura, por muy corto tiempo José Octavio Bordón (candidato del Frepaso a la presidencia en 1995, lo abandonó un año después y volvió al peronismo), luego Graciela Fernández Meijide (figura del movimiento de derechos humanos, carecía de experiencia política pero obtuvo resonantes triunfos electorales por una senaduría porteña en 1995, la Convención de la ciudad en 1996 y para la Alianza en la provincia de Buenos Aires en 1997) y en menor medida Aníbal Ibarra (militante comunista en su juventud, pasaría de concejal porteño a jefe de gobierno del distrito en 2000).

El proceso de ampliación de este frente de centroizquierda explica en gran medida esas debilidades: resultó del agregado de pequeñas estructuras organizativas difícilmente armonizables entre sí. Superpuestas unas a otras más que articuladas, conformaron círculos concéntricos en torno a los líderes, lo que las hacía aun más dependientes de éstos. Contra lo que el personalismo resultante de esta situación sugiere, lo cierto es que la necesaria cuota de autoridad disciplinadora y homogeneizadora que toda nueva fuerza política requiere para organizarse y mantenerse unida se ejercería en este caso muy parcialmente: más que una férrea voluntad organizativa y disciplinadora ejercida desde el vértice, y las reglas de juego por ella impuestas, lo que mantenía unido al heterogéneo conglomerado de fuerzas así reunidas fue, en lo esencial, las convergentes expectativas depositadas en el rápido crecimiento electoral. En la medida en que dicho

crecimiento dependía casi absolutamente de la popularidad de Chacho Álvarez, y luego de Graciela Fernández Mejjide, por su imagen pública y su eficacia comunicacional como críticos del menemismo podía descontarse su liderazgo indisputado y cierto marco de convivencia interna sin necesidad de recurrir a instrumentos organizacionales complejos. Es sintomático al respecto que en pleno auge electoral los líderes encontraran funcional, para preservar su libertad de maniobra y su perfil renovador en la escena pública, mantener distancia de esas estructuras organizativas, a sus ojos menos útiles para enfrentar las lides electorales que tenían por delante que la simpatía de los periodistas y el asesoramiento de encuestadores y analistas profesionales. También lo es que dichas estructuras, en ausencia de una orientación pedagógica y organizativa más rigurosa, tendieran a reproducir su faccionalismo y pobreza de recursos políticos al paso que iban ocupando los espacios institucionales (bancas de legisladores nacionales y provinciales y concejalías municipales principalmente) a que el Frente accedía gracias al desempeño de aquellas figuras.

Parte del problema que los líderes buscaban aventar se originaba en la brecha creciente que se abría entre las posiciones moderadas y «actualizadas» que ellos tendieron a adoptar respecto de las reformas de mercado aplicadas por Menem y de las políticas correctivas o superadoras que la fuerza se proponía implementar en caso de llegar al gobierno, y las culturas heredadas y orientaciones programáticas de las agrupaciones frentistas que, aunque heterogéneas entre sí, tenían por sustrato común las tradiciones de la izquierda y el populismo. Dado que esa modernización y «centricación» del discurso público del Frepaso tenía un papel esencial en el éxito de la fuerza, acercando a una importante masa de votantes que, aunque críticos del menemismo, no se dejaban seducir por la idea de volver atrás con las reformas ni por propuestas de cambios radicales que podrían reabrir un escenario de inestabilidad económica e institucional, sin ofrecer en compensación una garantía de ganancias en términos de crecimiento y distribución, el choque entre las visiones y propuestas de los líderes y las «bases» no se produjo en lo inmediato. Pero ello no redundó en un mayor consenso interno en la medida en que aquellos consideraban innecesario hacer pedagogía entre sus seguidores, y los grupos internos y sus jefes inmediatos pragmáticamente callaban sus disidencias, para no quedar al margen de los beneficios de la expansión de la fuerza, o bien interpretaron el «desvío» de los líderes como una táctica meramente coyuntural, que habría tiempo para corregir una vez que se alcanzara el poder.

En cuanto al radicalismo, tras las caídas electorales de 1994 y 1995 su futuro había quedado seriamente en cuestión. Pero no era la primera vez que el centenario partido, igual que el peronismo, enfrentaba una coyuntura crítica a nivel nacional refugiándose en sus bien afirmadas bases provinciales, que le permitían reproducir sus estructuras y planteles dirigentes a la espera de que se modificara el cuadro adverso. En 1995 la UCR retuvo cuatro gobernaciones

y sumó la del Chaco, en alianza con el Frepaso. Un año después se impondría en las elecciones para jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Además, a fines de 1995 renovó su conducción nacional, con lo que se aventó el fantasma de la fragmentación o la ruptura, abriéndose buenas posibilidades electorales para dos figuras en ascenso: el nuevo presidente del partido, Rodolfo Terragno, y quien sería electo jefe del gobierno porteño, Fernando De la Rúa.

Con todo, el partido seguía estando bajo la hegemonía y el control indirecto de Raúl Alfonsín, que disfrutaba todavía entre los radicales del prestigio ganado en 1983. Pese a los reveses experimentados por su gobierno, primero, y por sus tácticas y estrategias de oposición y colaboración frente al menemismo, después, había sabido conservar un rol preponderante que lo colocaba por encima de todas las facciones internas. Sin embargo, la hiperinflación del final de su administración seguía inhabilitándolo como candidato, y el programa de reformas de mercado aplicado por el menemismo había dividido a los radicales entre los grupos «progresistas» que lo rodeaban, contrarios a esas políticas, y los sectores de centro y de derecha del partido, encarnados por algunos de los dirigentes distritales con mayor respaldo electoral, que objetaban la corrupción y el decisionismo, pero aceptaban muchos de los lineamientos del modelo de mercado. La creciente gravitación de la figura de De la Rúa y su proclamación como candidato a la presidencia por la UCR no alteraron este cuadro pues no dieron lugar a un nuevo consenso partidario. En parte debido al estilo del propio candidato, que consistía en mostrarse indiferente a lo que hiciera y pensara la dirigencia radical.

De este modo se fue gestando una situación en cierto sentido inversa a la que vivía el Frepaso, pero que generaba dificultades no muy diferentes: alentado por las nuevas perspectivas electorales que abrían la crisis del menemismo y el fortalecimiento de sus propias figuras públicas, el partido radical aceitaba su maquinaria centenaria en todo el país, basada en estrictas reglas de competencia interna (que incluían un *cursus honorum* prácticamente imposible de obviar, y que consumían buena parte de los esfuerzos de los dirigentes y militantes radicales) a partir de un liderazgo con buena llegada al electorado independiente pero escasa gravitación en la vida interna, y bastante más conservador y pro-mercado que el grueso de la dirigencia partidaria. Con el agravante de que en el radicalismo la indiferencia de los candidatos respecto de los consensos internos y de los mecanismos establecidos para fijar la línea programática no sería algo tan fácil de aceptar como en el Frepaso.

¿Permitía la formación de la Alianza superar las dificultades que, por separado, agobiaban a los partidos opositores? ¿La concreción del acuerdo y la perspectiva de formar un gobierno de coalición resolvía los déficits estructurales que cada uno de ellos hubiera encontrado no sólo para ganar los comicios, si no para conformar una fórmula viable para gobernar, o simplemente los diluía en una etiqueta electoralmente atractiva?

Prueba de que esto no sería tan fácil es que la colaboración entre los

aliados estuvo lejos de consolidarse, y se enraizó muy desigualmente en los distritos y en los distintos sectores que componían cada una de las fuerzas. En una decena de provincias la Alianza no se concretó para las elecciones de 1997, y no en todos los casos se concretaría para las de dos años después. Allí donde el peronismo o los partidos provinciales gozaban de sólidas y amplias mayorías, radicales y frepasistas siguieron compitiendo por los mismos votos y espacios institucionales. Siendo ellos escasos, los radicales no encontraban razones para compartirlos con los frentistas, que en muchos casos tenían una inserción apenas marginal en esos distritos. Pesaba también la tradición partidaria, que en distritos fuertes del radicalismo (como la mayor parte de los que él gobernaba: Córdoba, Chubut, Río Negro y Catamarca) era marcadamente conservadora y seguiría siendo refractaria a las alianzas, en particular con sectores sindicales y de izquierda que allí conformaban el Frepaso. El éxito de 1997 fortaleció la continuidad del acuerdo hacia las elecciones de 1999, al elevar los costos de cualquier opción de salida: quien rompiera la Alianza enfrentaría un duro castigo electoral (al respecto, Adrogué y Armesto ofrecen interesantes datos). Pero, en segundo lugar, y en sentido contrario, elevó los costos en términos de identidad que los aliados pagaban, o creían estar pagando, para sostener el acuerdo. Preservar los recursos electorales «propios», para fuerzas políticas que tenían serias dificultades organizativas y coalicionales internas, y podían por lo tanto ver amenazados sus identidades y horizontes futuros, resultaba algo demasiado importante para sacrificarlo sin más en aras de una colaboración que vaya a saber cuánto tiempo duraría. Mientras la coalición brindara ventajas electorales y el acceso a espacios institucionales superiores a los que cada parte podría aspirar a alcanzar por separado, tanto por la muy probable dispersión de los respaldos propios en caso de ruptura como por la persistente consistencia del electorado peronista, era de esperar que primaran la competencia por sobre el faccionalismo. Pero sólo a nivel nacional o en los distritos donde ello se verificase. De lo que terminó resultando una dinámica de colaboración parcial y acotada, gracias a la cual cada uno de los aliados pudo seguir haciendo lo que sus limitados recursos le permitía. Estos límites a la colaboración se verificaron ya en la definición de la fórmula presidencial: la misma no pudo decidirse por consenso, requirió la realización de internas que consumieron tiempo y esfuerzo y dejaron significativas heridas para la convivencia entre las fuerzas. En dichas internas se impuso ampliamente Fernando De la Rúa. Su fortaleza en las encuestas electorales desde entonces no alcanzaría para evacuar las dudas que generaba de qué mecanismos se utilizarían para formar gobierno y tomar decisiones una vez en el poder, y para resolver las diferencias que existían entre las fuerzas aliadas y sus líderes más destacados.

La experiencia de coaliciones relativamente exitosas en Brasil y Chile indicaba que esos mecanismos eran imprescindibles, difíciles de construir y su preservación exigía un esfuerzo constante (Figueiredo y Limongi, 1999; Siave-

lis, 2001). Requerían, entre otras cosas, una delicada ingeniería parlamentaria y del gabinete y un ajustado manejo de la relación entre funcionarios de gobierno y dirigentes partidarios, que permitieran prevenir conflictos antes de que estallaran, debatir conjuntamente las políticas de gobierno que se pondrían en marcha en las áreas clave, así como distribuir responsabilidades y articular equipos conjuntos en la gestión. Y, por sobre todo, demandaban una fuerte disciplina en los partidos y su encolumnamiento detrás de líderes que, pudiendo ser más o menos capaces, debían tener claro cuáles eran sus responsabilidades. Cuestiones éstas a las que aquí debería dedicarse aún más tiempo y esfuerzo dado que se trataba de aliados muy recientes y con serias tendencias a la fragmentación y la indisciplina interna. Dado que, además, la Alianza había hecho del «buen gobierno» una pieza esencial de su estrategia para introducir cambios en la herencia menemista, la resolución de estos problemas coalicionales (que eran a la vez políticos, organizativos y técnicos) revestía una prioridad absoluta, que estuvo lejos de corresponderse con la atención que le destinaron sus dirigentes.

Los resultados electorales de 1999, finalmente, consagrarían a la coalición opositora, pero confirmando a la vez sus serias limitaciones. Si bien la Alianza triunfó a nivel nacional, lo hizo obteniendo aproximadamente los mismos votos que en las parlamentarias de 1997 (De la Rúa recibió poco más que el 46 % cosechado dos años antes, mientras que las listas de diputados retrocedieron cerca de 2 %), con caídas significativas en algunas elecciones provinciales; de modo que en el peronismo sólo el candidato presidencial, Duhalde, debió reconocerse derrotado. Salvo la presidencia, la distribución de los espacios institucionales y de poder no se alteró significativamente con los resultados de estos comicios. Confirmando lo que había empezado a definirse en 1997, en la Cámara de Diputados la Alianza le arrebató la mayoría al peronismo, pero por un margen demasiado estrecho como para garantizarse *quorum* propio o la posibilidad de tratar proyectos sobre tablas. El Senado no cambió su composición y el cuadro a nivel provincial era francamente desfavorable para la coalición: controlaba sólo seis gobernaciones (Entre Ríos y Mendoza, hasta entonces en manos del PJ, Catamarca, Chaco, Río Negro y Chubut), muy parcialmente una séptima (San Juan, donde se impuso un frente provincial en el que la UCR y el Frepaso tenían un papel secundario), y la ciudad de Buenos Aires, mientras que el peronismo gobernaba en 14 distritos, incluyendo tres decisivos, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba (este último arrebatado a la UCR por primera vez desde 1983). Alianza tendría que lidiar, en suma, con una fuerza de oposición potente a pesar de la derrota. Capaz de frenar o al menos condicionar fuertemente políticas de reforma que requirieran aprobación parlamentaria y el consenso de las provincias. Algo muy distinto de lo que sucedió con Menem en 1989, y aún más complejo de lo que le tocó en suerte a Alfonsín en 1983. A apenas dos años de su formación, la coalición lograba el sueño de conquistar la Presidencia, pero sin haber consolidado un respaldo mayoritario y sin haber podido traducir más que parcialmente el consenso electoral en poder institucional.

De la asunción del poder a la «tardía revelación» de la crisis

Los resultados electorales limitaron los ya estrechos márgenes de manio-
bra a disposición del gobierno de la Alianza al iniciar su mandato. Dada la
situación de relativo «empate» que habían arrojado las urnas, la Alianza estaba
obligada a buscar acuerdos y equilibrios, en suma, fórmulas de colaboración, ya
no sólo dentro de ella sino con el peronismo y otras fuerzas, en particular con
Acción por la República de Domingo Cavallo (que había obtenido cerca de dos
millones de votos para presidente y reunió una bancada de diputados nacionales
modesta pero que podía ser decisiva dada la relación de fuerzas entre peronistas
y aliancistas) y los partidos provinciales (que, aunque disminuidos, estaban en
condición de cumplir un papel semejante). Esta situación de empate, en un
contexto de crisis, si por un lado exigía demasiado a los estilos de liderazgo y
los patrones tradicionales de comportamiento de los partidos argentinos, por
otro ofrecía muy poco en términos de las políticas que hacía posible implemen-
tar. En particular en el terreno fiscal y macroeconómico, donde la recesión ini-
ciada en 1998 imponía condiciones muy duras a toda negociación, y en el de
las reformas institucionales, que eran tan esenciales al *ethos* aliancista como
irritativas para los peronistas y costosas en términos financieros y de recursos
políticos. Para colmo, el peronismo había perdido del todo su cohesión, y se
prefiguraban en él estrategias distintas e incluso contrapuestas hacia el nuevo
gobierno: gobernadores, senadores, diputados y jefes sindicales se alternarían
entre la oposición dura y los acercamientos para negociar apoyo por atenciones
financieras del gobierno nacional, ofreciendo escasas posibilidades a acuerdos
más permanentes. De este modo, el lapso que va de la elección a la puesta en
marcha de la nueva gestión estuvo signado por la reelaboración bajo presión de
las tenues iniciativas de cambio y por una compleja búsqueda de acomodamien-
to y acuerdo entre distintos actores: el presidente De la Rúa, el vicepresidente
Carlos Álvarez, el equipo económico, los partidos de la coalición, las facciones
peronistas, los grupos de interés, etc. Ello determinó que el gobierno de la
Alianza careciera del dinamismo del que toda nueva administración suele dis-
frutar en sus comienzos, y que a poco de andar se agudizaran los conflictos
nunca del todo resueltos en su seno respecto del liderazgo y las orientaciones de
la gestión. Para la Alianza, enfrentada al duro desafío de gobernar como coali-
ción, la necesidad de resolver al mismo tiempo una fórmula de acuerdo (o al
menos convivencia) con el peronismo, la posible incorporación de nuevos alia-
dos y su propia interna sería ya demasiado.

Contra lo que se podría esperar ante una tal situación (y contra lo que se
ha tendido a suponer en muchos análisis) el presidente electo no la encaró con
esmero ni urgencia. Antes bien, persistió en su estilo de «esperar hasta que la
ambigüedad se hiciera insoportable», y fue acomodando sus propias fichas allí
donde el agotamiento o el equilibrio entre los demás actores se lo permitía. Lo

que insumió, obviamente, un tiempo considerable, precisamente en el momento en que la variable tiempo comenzaba a correr en contra de sus márgenes de acción. Fue en el terreno económico donde más rápida y dramáticamente se reveló la inviabilidad de esta fórmula de gobierno. A fines de 1999 era ya ostensible que la recesión que había agobiado al peronismo durante su último año en funciones estaba yendo demasiado lejos y coartaba la posibilidad de contar con los recursos y las condiciones de negociación con los actores políticos y económicos que se requerían para algunas de las «correcciones» previstas. La estimación de que se produciría un «rebote» de la actividad económica, alentado por el inicio de la nueva administración y el anuncio de que se mantendrían los parámetros macroeconómicos a la vez que se estimularían las inversiones, el empleo y las exportaciones aún guiaba los pasos del presidente electo. De manera que, aunque esos estímulos debieran ser demorados hasta que se los pudiera financiar y negociar, apostó sus fichas a generar con los recursos a la mano ese «rebote». Dicha estimación y la apuesta a ganar la confianza de los inversores locales y externos, además, habían llevado a desatender durante la campaña la necesidad de advertir sobre la gravedad de la crisis. En ello pesó, más allá del optimismo de los aliancistas (comprensible en todo nuevo gobierno), el hecho de que los signos de que la crisis sería larga y aguda no habían tomado aún estado público. Y también, hasta cierto punto, la experiencia previa en el marco de la convertibilidad: si Argentina había superado el efecto *Tequila* en poco más de un año y había vuelto a crecer, ¿por qué no podría hacerlo de nuevo tras el efecto *Caipirinha*, ahora que estrenaba un gobierno más austero y sensato? Todo ello contribuyó a que no se prestara suficiente atención al cambio de contexto que se había producido en los años previos y al impacto que inevitablemente tendría en la economía del país: desde el *Tequila*, el dólar se había valorizado enormemente en relación a todas las demás monedas, y en particular en relación a las de aquellos países con los que comerciaba Argentina (Brasil, Chile, los europeos, etc.). Por otro lado, el peso de la deuda externa argentina se había incrementado sensiblemente en la segunda mitad de los noventa (trepando de alrededor de 80.000 millones a más de 120.000 en esos cinco años, llegando a representar cerca del 40 % del PBI y cerca de siete años de exportaciones) y sus vencimientos se concentraban en el período que se abría; mientras que se había mantenido constante, o incluso en aumento, el déficit público (llegó a los 7.000 millones en 1999 para el Estado nacional, debido en su mayor parte a la carga del sistema previsional remanente en sus manos, a lo que se sumaban alrededor de 3.000 millones en las provincias). En la búsqueda de fuentes de financiamiento, el sector público había desplazado a los privados y estimulado un alza sostenida de las tasas de interés. A ello debemos sumar la creciente desconfianza generada en los organismos internacionales, y por añadidura en los inversores externos, por el incumplimiento de las condiciones establecidas en los créditos concedidos durante la segunda

presidencia de Menem: ésta no había aprobado ni implementado casi ninguna de las reformas exigidas, en particular las referidas a las provincias y al sistema previsional nacional. Argentina ya no concitaba el interés ni la confianza de que había disfrutado en el quinquenio anterior, y eso se reflejaba en el «riesgo país» (indicador de la sobretasa que debían pagar el Estado y las empresas locales).

A todo eso debemos sumar una serie de medidas de último momento del gobierno saliente: aumento del endeudamiento y del gasto (generando una proyección del déficit de más de 10.000 millones para 2000), asunción de compromisos con empresas concesionarias de servicios, gobernadores y sindicatos que afectaban los recursos fiscales y los márgenes de maniobra a disposición de la nueva gestión, y lo que fue sin duda más determinante, el impulso y la aprobación de la llamada «ley de responsabilidad fiscal», que estableció el compromiso de reducir el déficit nacional en los siguientes cuatro años, hasta eliminarlo en 2003. Dado que la ley no establecía una regla equivalente para las provincias, significaba lisa y llanamente atar de pies y manos al futuro gobierno nacional en un aspecto en que el peronismo había disfrutado de una muy amplia libertad y las provincias, mayoritariamente bajo control del PJ, la seguirían disfrutando. Mientras el peronismo pudiera utilizar su mayoría en el Senado para que el peso del ajuste recayera en las cuentas del gobierno nacional, el desfilaro por el que debería caminar la Alianza sería estrechísimo.

El ministro de Economía, José Luis Machinea apuntó a que una brusca disminución del déficit redujera las tasas de interés, despertando la confianza de los inversores y a que ello tuviera un efecto expansivo sobre la actividad económica, en lugar del habitual efecto recesivo que sigue a medidas de ese tipo. Pero las medidas se adoptaron en forma gradual y parcial, y no tuvieron el efecto esperado. Hacia marzo de 2000 ya se había corregido el diagnóstico inicial: la recesión afectaba el nivel de recaudación en un grado que, a pesar de los ingresos obtenidos por el incremento del impuesto a las ganancias, hacía temer que el gobierno no lograra cubrir sus obligaciones externas y debiera recurrir a financiamiento suplementario (contra lo que había prometido, que no se incrementaría la deuda y no seguiría acaparando la capacidad de préstamo de los bancos y haciendo subir la tasa de interés de las empresas); y entrara en conflicto con las provincias y con sus propias fuerzas al verse obligado a hacer finalmente un fuerte recorte de gastos. Finalmente, en mayo se aprobó una dura política de ajuste, que empezó por un recorte generalizado de sueldos en la administración nacional (la baja de salarios, de entre el 12 y el 15 % a partir de los 1.000 \$ de ingreso neto, se hizo efectiva en forma inmediata, aunque no exhaustiva: los poderes judicial y legislativo fueron exceptuados y en muchas áreas de la administración se establecieron otras excepciones que terminaron volviendo algo caótico y bastante parcial el resultado) y, se anunció, seguiría con reducciones en las provincias, el sistema previsional, la obra social de los jubilados y una reforma del Estado que permitiría mejorar la gestión tributaria,

suprimir gastos prescindibles, racionalizar las compras, reducir o eliminar organismos, etc. Se incluyó también en el paquete de anuncios la desregulación de las obras sociales (para permitir mayor participación de empresas privadas en el mercado de los servicios de salud), la modificación de marcos regulatorios y contratos de concesión de las empresas privatizadas, de modo de reducir tarifas y mejorar los controles, y una «reforma política» dirigida a bajar los gastos de las legislaturas y los concejos deliberantes de todo el país, combatir el clientelismo y la corrupción. Estas dos últimas medidas se contaban entre las «correcciones» que la Alianza había prometido hacer, y se correspondían bien con el objetivo de darle al ajuste un carácter redistributivo y estructural: ligando la eficacia y transparencia de las instituciones representativas al uso austero y transparente de los recursos públicos, limitando los beneficios de las empresas de servicios privatizados, en favor del resto de los actores económicos, y compensando el disgusto causado por el incremento del impuesto a las ganancias y la baja de salarios con un ataque a los «privilegios» irritativos de los grupos económicos más poderosos y de la dirigencia política.

El efecto de estos anuncios, sin embargo, no fue el buscado: entre otras cosas porque, en vez de tomar decisiones concretas, se anunciaban cambios de un modo genérico e impreciso, dando la oportunidad para que se coaligaran intereses que no tendrían mayores dificultades en inmovilizar al gobierno antes de que pudiera poner manos a la obra. Los decretos que desregulaban las obras sociales merecieron el repudio de los sindicatos, que los impugnaron y detuvieron en la Justicia. La reducción de organismos no fue pareja en toda la administración, pues muchos funcionarios, alineados con los jefes partidarios, lograron resistirla. Los casos sin duda más demostrativos de estas limitaciones y que tendrían efectos políticos y económicos más perjudiciales fueron los dos más sensibles para el programa aliancista. Las empresas privatizadas resistieron con éxito los tímidos intentos de ponerlas en caja, y, sobre todo en peajes, teléfonos y petróleo, siguieron acumulando cuantiosas ganancias pese a la recesión generalizada. Sacaron provecho tanto de las penurias del fisco como de la indisposición del presidente a asumir conflictos, utilizando sus planes de inversión y sus contribuciones impositivas como arma de chantaje para que se respetaran sus mercados cautivos y sus rentas: el Ejecutivo se convenció de que no era el momento para hacerse de más enemigos y que se necesitaría de esas empresas para la reactivación (aplicando la misma lógica que había guiado a Menem: rentas a cambio de inversiones). Economía pudo concretar algunos avances en el terreno de la desregulación telefónica, aunque compensados por el rebalanceo de las tarifas del sector, y chocó contra la negativa de De la Rúa a castigar a los concesionarios que habían incumplido flagrantemente los contratos (como era el caso de correos y aeropuertos).

En cuanto a la «reforma política», Álvarez había hecho de ella, desde un principio, una bandera propia y la asumió no tanto como un programa de forta-

lecimiento institucional sino como medio para preservar un vínculo con la opinión pública e instrumento de presión mediático sobre los partidos, en particular sobre el peronismo, pero también sobre los de la Alianza, que se mostraban cada vez más desafiantes ante las iniciativas de ajuste del gobierno. Tan es así que Álvarez se ocuparía en persona de presionar a los diputados y senadores frepasistas de la provincia de Buenos Aires, que controlaban parte del descomunal presupuesto de esa legislatura, para que lo redujeran drásticamente; y de difundir los compromisos bipartidistas que en el Senado y en las legislaturas de muchos distritos regían la apropiación política de recursos públicos. El resultado no fue el buscado, no sólo porque, como era de esperar, la dirigencia partidaria, salvo algunas excepciones, resistió estos embates, sino porque la opinión pública castigó a la «clase política» en general: el gobierno terminaría pagando caro este activismo contra los gastos de la política, ya que no pudo responsabilizar por los excesos a la oposición y apareció débil e inconsecuente para avanzar en lo que había prometido sería un objetivo fundamental de su gestión, hacer que las instituciones representativas fueran más austeras y eficaces. Para colmo, los lances de Álvarez generaron aún mayores tensiones internas en la coalición, que se sumaron a los rechazos por las medidas de ajuste. Algunos de los partidos y grupos integrantes del Frepaso (el Partido Socialista Democrático, algunos diputados de extracción sindical, etc.) pasaron por esos días a la oposición. Los sindicatos estatales, encabezados por algunos de los sectores gremiales que mejores relaciones habían tenido con el aliancismo, iniciaron un plan de lucha que incluyó los primeros paros generales y numerosas movilizaciones. Por su parte, el peronismo anunció que resistiría el ajuste, aunque no se opuso a que el gobierno hiciera lo que pudiera en la administración nacional.

Los índices de popularidad del gobierno, que venían desplomándose desde marzo, parecieron estabilizarse por un tiempo. Pero el problema no era realmente la popularidad, sino la confianza en la capacidad de la Alianza de definir un rumbo y sostenerlo: el gobierno podía haberse recuperado más adelante en los índices de consenso si era capaz de mostrar voluntad y capacidad para llevar adelante las políticas emprendidas; pero sucedía que no lograba concretar lo que anunciaba. A diferencia del Menem de inicios de su primer mandato, que subió, cayó y volvió a subir varias veces en las encuestas, pero mostró siempre voluntad y capacidad de sostener el rumbo adoptado, el gobierno de la Alianza se debatía en una infinita serie de decepciones, ya no sólo con respecto a sus vagas promesas preelectorales, sino a los anuncios que semana tras semana hacían el presidente y sus funcionarios. Perdida la confianza (desde un principio débil) en su capacidad de gobernar, no habría forma de recuperar popularidad. Ello actuó como una fuerza disolvente del vínculo político que la Alianza había creado con el electorado, y de la fuerza de voluntad que animaba a los propios miembros de la coalición. En este clima, el reformismo y la cooperación, cemento esencial de la coalición, no tardaron en descomponerse.

Hacia mediados de 2000, en suma, cobraba forma un escenario ya radicalmente distinto al que había enmarcado la asunción del nuevo gobierno: las ideas moderadamente reformistas que sugerían como solución más conveniente para los problemas del país la introducción de correcciones en el modelo de convertibilidad estaban ahora en franca retirada. Se imponían en su lugar dos lecturas opuestas: la primera sugería volver a la más pura ortodoxia, que supuestamente había inspirado en sus orígenes el programa de reformas de mercado; y la segunda proponía hacer a un lado la convertibilidad y replantear «desde cero» el esquema de desarrollo (una sugerencia que ganaba adeptos entre los dirigentes radicales, peronistas y frepasistas, pero no en igual medida en la ciudadanía, que comprendía muy bien los costos de salida, devaluación mediante, que ello implicaba). Mientras que el presidente y su entorno, cuya influencia crecía a medida que aumentaban las dificultades y los conflictos en la coalición, fortalecían su apuesta por la primer alternativa, los partidos aliancistas se inclinaban más y más hacia la segunda, con lo cual aquellos se volverían a cada momento más impermeables a los puntos de vista partidarios y se convencerían de que la Alianza no era un instrumento adecuado para gobernar y que debían encontrar el camino hacia una nueva coalición de apoyo, y un nuevo gabinete.

Ese nuevo clima estuvo además signado por crecientes demandas sociales (protagonizadas por desocupados, sindicatos estatales y poblaciones de pequeñas y medianas ciudades del interior) que, combinadas con la persistencia de los desequilibrios fiscales, que las medidas de ajuste no terminaban de poner en caja, tendían a reforzar en el gobierno nacional las posiciones que sugerían evitar a toda costa nuevos frentes de conflicto y esperar, aguantar la presión «hasta que llegara la reactivación».

El fin de la Alianza y de la convertibilidad

Las malas noticias económicas volcaron a algunos líderes de la Alianza, entre ellos el vicepresidente Álvarez, a buscar logros compensatorios en otras áreas, como la lucha contra la corrupción. Ello redundó, en primer lugar, en la denuncia e investigación de casos resonantes de corrupción ocurridos durante la década menemista. Pero aunque durante la campaña no había habido mayores diferencias a este respecto, a medida que el gobierno halló más y más dificultades, acosar al peronismo con este asunto había dejado de atraer a muchos radicales. En particular a aquellos que apostaban a renovar acuerdos de convivencia bipartidista para asegurar la gobernabilidad. Álvarez ciertamente no se entusiasma con esta idea, y siguió dando impulso a denuncias que investigaba la Oficina Anticorrupción, pero sus ímpetus también decayeron tras el estallido de varios escándalos que involucraban a funcionarios del nuevo gobierno, en particular algunos pertenecientes al Frepaso. La situación se tornó aún más com-

prometida en agosto de 2000 a raíz de la denuncia periodística del pago de sobornos que habrían hecho funcionarios de gobierno a senadores nacionales, tanto del PJ como de la UCR, para lograr la aprobación de la reforma laboral, concretada en abril. Dicha crisis terminó enfrentando a Álvarez, transformado en máximo impulsor de la investigación y de los pedidos de renuncia a los implicados en el Senado y el Ejecutivo, con el presidente, que primero desestimó y luego buscó acotar el escándalo. Cuando a principios de octubre De la Rúa intentó al mismo tiempo dar por terminada la cuestión y reforzar su autoridad anunciando un recambio ministerial que reubicaba a figuras clave de su entorno y desplazaba a ministros y secretarios a él poco confiables (el jefe de Gabinete y el ministro de Justicia, ambos de la UCR), Álvarez renunció a la vicepresidencia y la coalición quedó al borde de la ruptura. De la Rúa lograría, así, poner aún más distancia entre el gobierno y los partidos, conformando un gabinete mucho más disciplinado que el anterior, pero al precio de un total aislamiento que terminaría agravando los problemas que buscaba resolver.

En cuanto a Álvarez, la renuncia le proporcionó libertad de maniobras, pero le quitó recursos para actuar. Si para forzar a radicales y frepasistas a aceptar un cambio coalicional, que en sus planes suponía la inclusión de Domingo Cavallo y el reconocimiento de un liderazgo más «confederado», debía actuar silenciosamente, hacerlo en su condición de ex vicepresidente no parecía que fuera a ser más fácil de lo que había sido estando en funciones. Influyó también en el rápido deterioro de los recursos en manos del líder frepasista el modo en que reaccionaron las dos fuerzas aliadas. En el fuero íntimo de muchos radicales, y sobre todo de los delarruistas, el Frepaso era un fruto pasajero de un accidente o de un error del propio radicalismo que ya se había remediado. Debía convivirse con él mientras fuera necesario, pero no había por qué acostumbrarse a esa convivencia, porque él no sería eterno, ni siquiera durable. La renuncia de Álvarez vino a sellar el certificado de inviabilidad para esa fuerza en la opinión de muchos dirigentes de la UCR, incluso de muchos alfonsinistas. Por su parte, en el seno del Frepaso se mantenía viva la idea de una crisis inevitable e inminente de los partidos tradicionales, que el frente debía ayudar a desencadenar, y que afectaría al radicalismo tanto como al peronismo. En función de este pronóstico, la Alianza no debía concebirse como coalición de partidos sino como superación del bipartidismo en decadencia, expresión de un movimiento transversal, transpartidario, que sustituiría a la vieja política, corrupta, excluyente, impopular, por una «nueva política» regenerada. La persistencia del hábito de la «convivencia» entre radicales y peronistas, que les permitía acordar la distribución de recursos y espacios institucionales en las provincias y los municipios igual que en el Senado, alimentó en el Frepaso este espíritu regenerativo y antipartidario, muy difícilmente compatible con la participación en la Alianza y en su gobierno. Y fue ese espíritu el que se agitó en toda su virulencia cuando Álvarez anunció su renuncia y prometió seguir luchando contra la

«vieja política». Con ese mensaje muy difícilmente podía justificarse seguir en el gobierno, y menos aún volver a él junto a Cavallo. Fue en esa tensión que el proceso de descomposición interna del frente se aceleró, y ya no se detendría: su bloque de diputados nacionales se siguió desgranando y la fuerza perdió más y más terreno frente a las opciones que desde la izquierda consideraban, con bastante razón, que la actitud adoptada por Álvarez era incomprensible.

De este modo, tras la renuncia de Álvarez el precario juego de colaboración que había existido hasta entonces entre las fuerzas aliadas, del que dependía la sobrevivencia de la coalición, quedó definitivamente de lado y en su lugar se instaló un virulento juego faccioso. De la Rúa intentaría hacer sólo lo que no había podido hacer con Álvarez, orientar la gestión y ganar aliados. Pero si en cualquier circunstancia, con sus escasos recursos personales y partidarios, eso le hubiera sido muy difícil, en los durísimos tiempos que le tocó enfrentar le resultó absolutamente imposible. Las ilusiones depositadas en la promesa de lograr un «buen gobierno» naufragaron así en la agudización del déficit de gobernabilidad, que se buscaría cubrir con cuotas crecientes de decretismo e improvisación sobre la base de la receta de encapsulamiento ortodoxo. Cuando finalmente se incorporó Cavallo al gabinete ello no fue acompañado por la inclusión de su partido en la Alianza y fue precedido por la fuga de varios ministros y el desbande de los legisladores aliancistas. Muchos dirigentes radicales y frepasistas ya se habían convencido de que «la Alianza necesitaba otro gobierno», y se limitaron a esperar el fracaso final de De la Rúa. El destino de éste quedó irremisiblemente atado a la suerte de las políticas económicas de Cavallo, sin poder contribuir en nada a dicho éxito, dada la absoluta falta de respaldo partidario y la pérdida de confianza de la opinión pública. Llamativamente, el régimen de convertibilidad se sostendría aún por largos nueve meses (marzo a diciembre de 2001), principalmente por la resistencia de la ciudadanía y la mayor parte de la dirigencia a respaldar cualquier opción de salida, que suponía altísimos costos inmediatos y remotos y dudosos beneficios futuros (que ningún dirigente, dado el contexto de frustración e inestabilidad política reinante, podía asegurarse). A ello contribuía también la persistente fragmentación del peronismo, que contaba con los recursos institucionales (y desde las parlamentarias de octubre de 2001 también con los electorales) para condicionar al gobierno, pero carecía de liderazgo y de programa para encarar una gestión de la crisis.

3. El derrumbe de la convertibilidad y el regreso del peronismo al poder

Los déficits de capacidad de gobierno que ya habían afectado la segunda gestión de Menem, alentando el progresivo debilitamiento de las iniciativas de reforma y la «fuga hacia delante» a través del endeudamiento y el déficit fiscal, resultaron obstáculos insuperables para sus sucesores aliancistas en un contexto de

recesión económica y escasos recursos políticos a disposición del Ejecutivo nacional. Sin duda que a fines de 1999 era impensable una concentración de poder equivalente a la de diez años antes y de todos modos la crisis no podía evitarse, dada la extrema complejidad del marco económico, las presiones cruzadas de los grupos de interés y la opinión pública y el poder de veto instantáneo de los operadores financieros. Pero, ya que todavía en esos meses no estaba planteada la inevitabilidad de un cambio de régimen monetario y de una renegociación amplia de la deuda, de lo que se trataba era de apuntalar las defensas contra la tormenta, fuera para evitar esa circunstancia o para enfrentarla en las mejores condiciones posibles. Aunque la gestión económica, al menos hasta fines de 2000, hizo esfuerzos en esta dirección, la Alianza no contribuyó a una cosa ni a la otra sino que, al contrario, introdujo inconsistencias en el manejo de los tiempos, la formación de consensos y la toma de decisiones, aportó nuevos conflictos y finalmente tiró por la borda su más elemental cohesión. De modo que cuando se volvió inescapable el cambio de reglas económicas no existirían recursos mínimos para enfrentarlo. Como sucediera en 1989, la crisis fue la *ultima ratio* para justificar la concentración de poder en el presidente; pero en la medida en que se trató de un presidente crecientemente aislado, ello sólo redundó en su atrincheramiento a la espera de que el no menos aislado pero hiperactivo Cavallo encontrara con una fórmula mágica de salida. Lo que finalmente nunca llegó.

Si bien el PJ no practicó una oposición desleal a De la Rúa, e incluso colaboró en la aprobación de algunas de las leyes de emergencia requeridas por él en sus últimos meses, cuando los legisladores del radicalismo y del Frepaso se negaron a seguir haciéndolo, es también cierto que sectores importantes del peronismo, en particular en la provincia de Buenos Aires, alentaron o al menos no impidieron la ola de saqueos y protestas que dio el golpe definitivo al gobierno aliancista. Por otro lado, De la Rúa careció de interlocutores en la oposición con los que fuera viable debatir un acuerdo global sobre el modo de encarar la crisis económica y garantizar la gobernabilidad (algo que, es justo decir, tampoco estuvo en sus planes hasta que fue demasiado tarde). Esa ausencia se relaciona con la aguda fragmentación interna, resultado a su vez de la distribución federal del poder institucional y partidario en su seno, y del congelamiento de la sucesión del liderazgo nacional que resultó de la derrota electoral de Duhalde en 1999: Menem seguía siendo el presidente del partido, pero sin capacidad para encabezar ya un consenso amplio en la fuerza, en parte porque Duhalde retuvo un control férreo sobre el peronismo bonaerense (donde logró imponer a su sucesor en la gobernación en 1999), en parte por la presencia de figuras regionales con bases propias y aspiraciones de suceder a ambos caciques nacionales, y en parte también por los disensos que en su seno generaba la crisis de la convertibilidad. Este cuadro de fragmentación se magnificó, y volcó en una disputa aún más aguda por el poder, apenas contenida por el marco institucional, tras la caída de De la Rúa.

Entre fines de diciembre de 2001 y principios de enero de 2002 el país tuvo tres presidentes peronistas, como consecuencia de la dificultad para llegar a un acuerdo dentro de esa fuerza sobre el rol y duración que debía tener el gobierno de emergencia, en función de distintas interpretaciones de la Ley de Acefalía. El primero de ellos, Ramón Puerta, hasta entonces presidente provisional del Senado y cabeza de una liga de distritos pequeños, por ser una figura regional con aspiraciones de liderazgo nacional no logró los apoyos necesarios de las provincias de mayor peso (Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) para hacer de su apresurada asunción el paso hacia una presidencia más que transitoria. Fue sucedido por Adolfo Rodríguez Súa, gobernador de San Luis, quien tras declarar el default de la deuda pública intentó violar el acuerdo sellado con sus pares del PJ para llamar elecciones en el corto plazo y fue obligado a renunciar. Finalmente, en los primeros días de 2002 una nueva sesión de la Asamblea Legislativa eligió a Duhalde, que recibió el apoyo de buena parte de los legisladores peronistas y del resto de los partidos para gobernar hasta fines de 2003. Aunque la decisión mereció el rechazo del sector menemista y de los seguidores de Rodríguez Súa. La presidencia de Duhalde, iniciada con una fuertísima devaluación del peso que liquidó la convertibilidad, estaría signada por un abierto debate sobre su legitimidad de origen y el persistente reclamo desde distintos sectores de elecciones anticipadas para todos los cargos, o al menos para presidente.

El PJ era el dueño de la situación, dada la aguda crisis que sufrían radicales y frepasistas, pero ello suponía tanto oportunidades para componer nuevamente su «fórmula de gobierno», en la medida en que pudiera capear el temporal y restablecer la estabilidad y la confianza política, como riesgos a su propia supervivencia. Debía resolver su disputa interna para poder ir a elecciones y corría el serio riesgo de que ese proceso interno fuera la oportunidad para una fractura abierta y tal vez irreparable, más que para una resolución pacífica de la cuestión, y se impusiera a consecuencia de ello en los comicios presidenciales alguna expresión opositora: durante los primeros meses de 2002 las posiciones preeminentes en las encuestas de opinión las ocuparon dos figuras que sintonizaban con las protestas callejeras contra el «corralito» (la retención de los depósitos por parte de los bancos) y los efectos inflacionarios y recesivos de la devaluación y el default: la diputada Elisa Carrió, que había abandonado el radicalismo poco tiempo antes y formado Afirmación para una República de Iguales (ARI), y el también diputado Luis Zamora, antiguo dirigente del trotskismo local ahora abanderado de posiciones más cercanas al anarquismo. Tras ese tórrido verano, ascendió raudo en el favor popular el efímero ex presidente Rodríguez Súa, que anunció competiría por fuera del PJ y congregó en torno suyo un aquelarre de figuras provenientes del radicalismo, pequeños grupos nacionalistas, ex militares carapintadas, etc., inspirando tan poca confianza y simpatía como los anteriores en el resto del peronismo.

En esta situación, el sector peronista en el gobierno, contando en principio con respaldos firmes sólo en el distrito bonaerense, se vería obligado a buscar soluciones *ad hoc* en difícil ajuste con el marco constitucional. Ya se había dado un paso significativo en esa dirección cuando, al designar a Rodríguez Sáa, la Asamblea Legislativa votó una ley para realizar elecciones presidenciales anticipadas con el sistema de lemas (que permite a los partidos presentar «sublemas» cuyos votos se suman al que resulta más votado dentro del lema, para establecer cuál de los partidos resulta vencedor), algo que no era compatible con las leyes electorales y las normas constitucionales vigentes. Esa idea volvió a circular en los conciliábulos del PJ tras la asunción de Duhalde, impulsada por el gobernador cordobés, José Manuel De la Sota. Y era resistida principalmente por Menem, que contaba todavía con importantes apoyos en el seno del partido pero era superado por otros candidatos entre los votantes independientes, por lo que buscaba cerrar la competencia y obligar a los demás aspirantes peronistas (Puerta, el ya mencionado De la Sota, y Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz), a competir en su terreno.

Finalmente, forzado por la profundidad de la crisis económica y de confianza hacia su gobierno, y las constantes movilizaciones y protestas protagonizadas por sectores medios (ahorristas y deudores bancarios) y populares («piqueteros» desocupados y sindicatos opositores), Duhalde anunció en agosto de 2002 la realización de elecciones anticipadas, pero dando un lapso prolongado de tiempo para resolver la interna oficial. En lo que siguió se intentaron varias fórmulas: la realización de internas abiertas simultáneas de todos los partidos en los últimos meses del año (se aprobó en junio una ley a tal efecto, pero el menemismo logró bloquear su aplicación), el ya mencionado sistema de lemas y, finalmente, el recurso de no reconocer ningún candidato oficial del PJ, decisión adoptada por impulso de Duhalde en el congreso nacional partidario. Duhalde todavía necesitaba hallar un candidato que oponer a Menem, capaz de compensar con votos independientes la esperable ventaja del ex presidente entre los peronistas, y eso no le resultó nada fácil. Él mismo se había excluido al asumir el gobierno y no logró convencer a Carlos Reutemann, gobernador de Santa Fe hasta entonces ligado al menemismo pero muy favorecido en las encuestas de opinión, de que aceptara una candidatura «de consenso». Finalmente, en enero de 2003, Duhalde anunciaría su apoyo a Kirchner.

Sin duda que son muchos los factores que intervinieron en este proceso a lo largo del cual el peronismo enfrentó dividido el desafío de gobernar una crisis económica galopante y fue modificando, adaptando o desconociendo las reglas preestablecidas y las que él mismo introdujo como soluciones *ad hoc* a la crisis política. Una de las cuestiones sobre las que se ha insistido para explicar la radicalidad alcanzada por las disputas en el seno de ese partido es la que alude a la contraposición ideológica entre dos proyectos económicos y de inserción internacional. La idea de que Menem y Duhalde encarnaban «dos modelos

de país» en pugna, más allá de la eficacia retórica que puede haber tenido durante el desarrollo del conflicto, funda su credibilidad «explicativa» en la efectiva disputa en torno a ciertos temas macroeconómicos e internacionales: la posición frente al Mercosur y el ALCA, frente a la devaluación y la dolarización, respecto de la política de compensaciones al sistema financiero por la «pesificación asimétrica» de deudas y créditos decidida a comienzos de 2002. Con todo, la dramatización de estas diferencias es más significativa que las diferencias en sí, en muchos casos de grado, y en todos el resultado más que el motor de la puja generada por una bicefalia partidaria irresuelta durante años.

Esa situación de bicefalia y bloqueo se explica, en primer lugar, por el carácter marcadamente heterogéneo de la coalición peronista, y también por el lugar predominante que este partido ocupa en el sistema político argentino, que limita las capacidades de las demás fuerzas para conformar una mayoría electoral e institucional sólida y perdurable. De ello resulta una competencia electoral acotada a ciertos distritos y grupos sociales (las grandes ciudades, los sectores medios), la formación de santuarios de poder indisputado, sobre todo en los distritos pequeños y periféricos, y, consecuentemente, muy débiles constreñimientos sobre el peronismo para actuar responsablemente, colaborando con otras fuerzas políticas y sometiendo a las reglas de juego. Vista con estos ojos, puede decirse que la crisis de 2001 confirma y a la vez refuerza una característica que signara al sistema político argentino desde 1983, o incluso desde antes: sólo el peronismo es capaz de conformar una mayoría electoral e institucional suficientemente amplia para enfrentar los complejos problemas políticos y económicos del país, pero lo logra a través de una fórmula de gobierno estructuralmente dependiente de poderes institucionales (los gobernadores de provincias) y fácticos (los grupos de interés con poder de veto) y por tanto reproduce la debilidad de recursos en manos del Estado nacional. Esta combinación de tendencias a la hegemonía y la fragmentación, que se revela en la crónica «penuria de gobernabilidad» del sistema, se explica, en última instancia, por la debilidad de un sistema de partidos desequilibrado e integrado por actores poco cohesionados, tanto en términos organizativos, por el poder de los gobernadores y caudillos locales, como programáticos e ideológicos.

Entre la hegemonía y la fragmentación

En los comicios realizados en abril de 2003 finalmente el peronismo presentó tres candidatos: Carlos Menem, que obtuvo el 24 % de los votos en la primera vuelta, Néstor Kirchner, que recibió el 22 %, y Alberto Rodríguez Sáa, que ocupó el cuarto lugar, por detrás de Ricardo López Murphy, un ex radical que congregó detrás suyo una coalición de centroderecha, y pocos votos por delante de Elisa Carrió. En conjunto los tres candidatos del PJ reunieron cerca

del 60 % de los votos. Tras la renuncia de Menem a presentarse a la segunda vuelta, en la que se anticipaba una amplia victoria de Kirchner, éste asumió la presidencia, logrando en poco tiempo reagrupar a las huestes peronistas, con particular éxito en las cámaras legislativas. Sin embargo, los principales obstáculos que enfrentó el nuevo presidente surgieron de las propias filas de su partido, específicamente de gobernadores provinciales con aspiraciones presidenciales. Dada la extrema debilidad que siguió afectando a las fuerzas opositoras esto era previsible. Frente a los demás caudillos peronistas Kirchner, emulando inconfesadamente a Menem, ha buscado atraerse el apoyo de sectores de la opinión pública y grupos de interés no peronistas. Ello, si bien le ha permitido fortalecerse y fortalecer a su gobierno, lo obligó a comprometerse con una agenda de demandas extremadamente amplia y peligrosamente inconsistente.

Los análisis referidos a esta nueva experiencia peronista que se inicia suelen poner el acento en la tradicional «vocación hegemónica» de esa fuerza y en su no menos conocida tendencia a «funcionar como un sistema político en sí mismo» (Torre, 1999) que canaliza en su seno los conflictos y las expectativas de los más diversos grupos sociales. Sin embargo no todo es continuidad ni en el seno del PJ ni en su entorno. Hace algún tiempo Vicente Palermo escribió: «el peronismo del '73 es esencialmente un peronismo que es expresión de sí mismo, de las fuerzas (sociales, políticas, corporativas) que contiene en su propio seno. Fuerzas que, a la hora del peronismo gobernar, harán sentir su poder de veto de un modo u otro, y con una formidable potencia autodestructiva. En cambio, el peronismo del '89 es un peronismo que sale al encuentro de fuerzas de diferente tipo que no están en su seno, sino claramente fuera de él. Continuando con el contraste, el peronismo del '73 es un peronismo que *se concibe a sí mismo como la expresión de la nación*; por lo tanto, mecánicamente, un gobierno peronista es un gobierno nacional. El peronismo del '89, en cambio, *es agudamente conciente de que no es la expresión de la nación* y que para gobernar debe, de un modo u otro, expresar una voluntad o una orientación nacional. Al mismo tiempo, el peronismo del '73 tiene su propia visión de las cosas, para el mundo; el peronismo de 1989 adopta una visión de las cosas que le impone el mundo» (Palermo, 2001). El contraste que nos presente Palermo desmiente el argumento de la continuidad, en el peronismo, de una misma vocación hegemónica y una misma tendencia a abarcar todo el espectro político. Siguiendo este argumento, podemos decir que la crisis de diciembre de 2001 y los acontecimientos posteriores confirman y profundizan la discontinuidad: la crisis de confianza en las fuerzas políticas obliga al peronismo a buscar fuera suyo las voluntades que aspira a representar y gobernar. Sin embargo, y al mismo tiempo, existe una marcada continuidad entre ambas situaciones, resultante del hecho de que en la aspiración del peronismo de capturar esas voluntades, encuentra que le es no sólo posible sino necesario confundirse con las más diversas voces y corrientes de la sociedad. Lo paradójico, y verdaderamente

novedoso de esta situación, en última instancia, es que el problema no está «en el peronismo» sino fuera de él. Para graficarlo: podemos imaginar que si en el PJ primaba en abril de 2003 la disciplina partidaria y el respeto a las reglas institucionales, muy probablemente se encaminaba a una derrota electoral sin poder evitar la fractura, y en cambio si se dejaba llevar por las corrientes de opinión más prometedoras en términos electorales, la fractura hubiera sido segura aún cuando se pudiera evitar una derrota inmediata. De todo ello, lo más significativo no es sólo el modo en que el peronismo logró evitar esa doble amenaza, sino la peculiar situación en que lo coloca una sociedad cuyas fuerzas más dinámicas ya no le pertenecen pero que no es representada por ninguna otra fuerza política consistente.

Visto desde hoy, podría pensarse que finalmente «sucedió lo que tenía que pasar», y se dio el escenario más probable: finalmente el peronismo sigue siendo una fuerza capaz de procesar sus diferencias (aun al precio de descargar los costos de ello en toda la sociedad y en las instituciones) de producir liderazgos, de administrar el gobierno aun en contextos de crisis aguda, y de movilizar a millones de electores. Pero si reconstruimos paso a paso el curso de los acontecimientos podemos advertir hasta qué punto intervinieron en él el arte político, un complejo e impredecible juego de estrategias en pugna, y también una cuota de azar. Nos referimos ya al manejo de los tiempos y de las reglas electorales realizado desde el Ejecutivo a todo lo largo de 2002. A ello debemos sumar el relativo buen desempeño de las políticas anticrisis, en particular a partir de la segunda mitad de ese año, que proveyó al duhaldismo recursos suplementarios para pilotear la crisis interna del PJ —aunque no los suficientes como para construir una voluntad mayoritaria en su seno— y, lo que fue más importante, un margen de maniobra creciente para promover una fórmula presidencial electoralmente competitiva, sobre todo fuera del peronismo. Por otro lado, el contexto de relativa estabilidad y recuperación económica desde mediados de ese año tornó progresivamente menos significativos los desacuerdos programáticos —que viraron de un lado y del otro hacia el centro— reenviando el conflicto hacia las reglas de juego electoral. La contención de la crisis significó esencialmente desmentir los diagnósticos catastrofistas y quitar sustento a las opciones más radicalizadas, principalmente a aquellas que detrás de la consigna de «que se vayan todos» aspiraban a convertir el masivo descontento de 2001 en una nueva mayoría detrás de un programa de «refundación nacional».

Se podría decir que el PJ ocupa ahora el centro político (Kvaternik, 1994), y ello permitirá que se desarrollen a su derecha y a su izquierda fuerzas competitivas con electorados bastante diferenciados entre sí, provenientes ambos en alguna medida del radicalismo (que en las presidenciales de 2003 obtuvo apenas el 2 % de los votos). No existen precedentes cercanos a esa configuración en la historia política argentina, pero en cambio puede establecerse una analogía bastante estrecha con la situación del sistema mexicano posterior a 1988. En el

caso mexicano, recordemos, la división de la oposición no impidió que un partido durante décadas hegemónico fuera finalmente derrotado: el desgranamiento de votos del PRI hacia el PRD (centroizquierda) fue casi simultáneo al fortalecimiento de la oposición de centroderecha (PAN), que se impuso en las elecciones presidenciales de 2000. ¿Podría suceder algo semejante en Argentina? Ante todo debemos decir que en el caso mexicano la fuerza opositora que venció la hegemonía priísta contó para ello con una sólida identidad y bases de apoyo locales construidas a lo largo de décadas. Lo único comparable en nuestro caso sería el radicalismo. En segundo lugar, en México las reglas electorales y el sistema federal no se conjugan como en Argentina para debilitar la estructura nacional de los partidos. Todo lo contrario, encontramos allí una larga tradición de liderazgos y organizaciones partidarias nacionales. Si bien la mayor competencia a nivel nacional también ha favorecido la «federalización» de los partidos, en particular en el PRI, ese proceso tiene un alcance mucho menor que en el caso argentino.

Pero hay otros dos elementos tal vez más relevantes que dificultan que en Argentina se consolide algo así como un tripartidismo equilibrado. En primer lugar, la aguda frustración resultante de la experiencia de la Alianza puede colocar por largo tiempo muy abajo en el orden de prioridades la alternancia entre partidos. En segundo lugar, el peronismo ha demostrado en esta crisis y en su desenlace la plasticidad y amplitud de su «abanico populista» y su eficacia para neutralizar a potenciales rivales y adaptarse a profundos cambios en las preferencias de la ciudadanía. Hemos relativizado aquí la idea de que en su seno compiten distintos «modelos de país», pero no puede ignorarse la profundidad de las disidencias programáticas e ideológicas que el conflicto entre Menem y Duhalde suscitó. Y lo mismo cabe decir de las orientaciones adoptadas por Néstor Kirchner. A la aspiración menemista de reconquistar el alma del peronismo para consolidar su orientación en clave neopopulista y neoliberal (equivalente en alguna medida a la orientación que con más suerte ha logrado infundirle la mayoría moral cristiana al partido republicano en EE.UU.), Duhalde y Kirchner le contrapusieron una suerte de «regreso a las fuentes» nacionalistas, desarrollistas y populistas, en términos bastante moderados, con la aspiración de dar por cerrada la «década menemista» (interpretada desde este sector como una desviación «promercadista» tal vez coyunturalmente inevitable pero ya injustificada), y relanzar el movimiento sentando sus reales en el centro político.

Con todo, el cariz que adopta hoy el «abanico» de voces peronistas complejiza el panorama para esta reunificación partidaria. Kirchner, quien conquistó la presidencia fundamentalmente gracias al apoyo de Duhalde y del peronismo bonaerense, pareciera querer hacer con éste y el resto de las facciones internas lo mismo que ambos hicieron con Menem: captar las corrientes de opinión no peronistas para cambiar una relación de fuerzas desfavorable en la interna partidaria. Ello significa, en su caso, formar en el seno del PJ un polo progresista y

de «reformismo institucional» (a través de juicios a los militares por las violaciones a los derechos humanos, modificaciones en la Corte Suprema, en la regulación de servicios) que le permitiría al peronismo hacer lo que no pudo a fines de los noventa: ofrecer una opción competitiva con la centroizquierda y con la oposición en general en los temas republicanos para apropiarse de una parte de sus bases electorales. En reacción a ello Duhalde, cuyas preferencias de siempre por ubicarse en el centro político se corresponden ahora con el celo en hacer respetar las fronteras y cierta cohesión partidarias, tiende a coincidir con sus anteriores adversarios internos, y a preferir un camino de moderación en los cambios institucionales y la renovación de dirigentes que dejaría insatisfechos a los electores no peronistas; pero podría permitir la recuperación de las fuerzas que aspiran a representarlos y por tanto de la competencia y del equilibrio en el sistema de partidos.

¿Estamos entonces en los prolegómenos de un nuevo ciclo hegemónico o ante la no menos peligrosa profundización de la fragmentación? Es difícil saberlo, pero podemos imaginar el siguiente escenario: si el proyecto de Kirchner avanza produciendo cambios institucionales y una sostenida recuperación económica, su consagración puede implicar el reforzamiento de la hegemonía peronista, mayor irrelevancia de la oposición e internalización de la competencia política en el PJ. En ese caso dependerá de cómo se planteen y se resuelvan sus conflictos internos el modo en que se gestionen reformas institucionales que podrían dar lugar a más amplias y permanentes capacidades institucionales y recursos de gobierno. Los demás partidos, que si bien no han desaparecido han fracasado tan redondamente en la tarea de gobernar, probablemente tengan una ingerencia muy menor en la gestión de esos cambios, aunque pueden ser a largo plazo sus principales beneficiarios. El dilema al que parece enfrentado el sistema político argentino podría resumirse en la siguiente interrogación: ¿cómo superar la alternativa entre el lábil reformismo (económico, institucional, etc.) de un peronismo hegemónico y un pluralismo que hasta aquí ha mostrado ser tan inestable como estéril en términos de reformas y capacidad de gobierno?

BIBLIOGRAFÍA

- ADROGUÉ, Gerardo y Melchor ARMESTO (2001): «Aún con vida. Los partidos políticos argentinos en la década del noventa», *Desarrollo Económico*, vol. 40, n.º 160 (enero-marzo 2001).
- BONVECCHI, Alejandro (2001): «Political Processes in Financial Crises» (mimeo), Buenos Aires.
- y PALERMO, Vicente (2001): En torno a los entornos: presidentes débiles y partidos parsimoniosos, *Revista Argentina de Ciencia Política*, año 3, n.º 6, Universidad de Buenos Aires.
- BRUHN, Kathleen (2000): «Out in Left Field: Neoliberalism and the Dilemmas of the Mexican Left», paper presentado en IPSA, Quebec, agosto 2000.
- FIGUEIREDO, Angelina y Fernando LIMONGI (1999): *Executivo e Legislativo na nova ordem constitucional*, Editora da FGV, Río de Janeiro.

- GEDDES, Barbara y Allyson BENTON (1997): «Federalism and Party System», paper presentado en la Conferencia «The Transformation of Argentina: Democratic Consolidation, Economic Reforms and Institutional Design», CEDI-Universidad de San Andrés, Buenos Aires, 20 de junio de 1997.
- GERVASONI, Carlos (1998): «Estructura y evolución de las coaliciones electorales en Argentina: 1989 y 1995» (mimeo), Buenos Aires.
- GIBSON, Edward y Ernesto CALVO (1997): «Electoral Coalitions and Market Reforms: Evidence from Argentina» (mimeo), Northwestern University.
- KVATERNIK, Eugenio (1994): «El peronismo de los 90: un análisis comparado» (mimeo), Buenos Aires, Universidad del Salvador, IDICSO.
- LEVITSKY, Steven (1997): «Crisis, Party Adaptation, and Regime Stability in Argentina: The Case of Peronism, 1989-1995», paper presentado al Congreso LASA en Guadalajara, 17-19 de abril de 1997.
- LANZARO, Jorge (comp.) (2001): *Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina*, Clacso, Buenos Aires.
- MORALES SOLÁ, Joaquín (2001): *El sueño eterno. Ascenso y caída de la Alianza*, Planeta / La Nación, Buenos Aires.
- MUSTAPIC, Ana María (1996): «El Partido Justicialista. Perspectiva histórica sobre el desarrollo del partido. La estructura del partido» (mimeo), Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires.
- NOVARO, Marcos y Vicente PALERMO (1998): *Los caminos de la centroizquierda: dilemas y desafíos del Frepaso y de la Alianza*, Losada, Buenos Aires.
- PALERMO, Vicente (2001): «El menemismo revisitado» (mimeo), Buenos Aires.
- SERRAFERO, Mario (1997): *Reelección y sucesión presidencial*, Buenos Aires, Editorial de la Universidad de Belgrano.
- SIAVELIS, Peter M. (2001): «Chile: relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo después de Pinochet», en Jorge Lanzaro (comp.), *op. cit.*
- TORRE, Juan Carlos (1999): «El peronismo como solución y como problema», en Marcos Novaro (comp.), *Entre el abismo y la ilusión. Peronismo, democracia y mercado*, Buenos Aires, Norma.
- (2003): «Los huérfanos de la política de partidos. Sobre los alcances y la naturaleza de la crisis de representación partidaria» (mimeo).

Marcos Novaro es profesor de Teoría Política de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Conicet. Ha publicado numerosos artículos sobre crítica contemporánea argentina y es autor de «Pilotos de tormentas. Crisis de representación y personalización de la política en Argentina» (1994) y «Representación y liderazgo en las democracias contemporáneas» (2000).